19813 *ORDEN TAS/2978/2003, de 9 de octubre, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 5 de noviembre de 2001 por la que se adjudicaban puestos de trabajo ofrecidos en el concurso (6/01), convocado por Orden de 18 de junio de 2001.*

En el recurso de apelación 7/03 interpuesto por el Abogado del Estado en representación de la Administración Central, contra la Sentencia de 20 de junio de 2002, dictada en el recurso tramitado por el procedimiento abreviado 60/2002, seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Madrid, siendo parte apelada D.ª Josefa I. Rebollo Sánchez, se ha dictado, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sentencia de fecha 7 de mayo de 2003, en cuya parte dispositiva se estima en parte el recurso de apelación interpuesto, anulando la Sentencia recurrida y declarando en su lugar la retracción del procedimiento del concurso de provisión, en lo que respecta a los puestos de orden números 6 (adjudicado a D. Antonio Florido Martínez), y 7 (adjudicado a D.ª M. Ángeles Ardila Barroso), a fin de que por la Comisión de Valoración se proceda a valorar de nuevo valorar de nuevo los méritos específicos concurrentes en los solicitantes D.ª M. Ángeles Ardila Barroso (para el puesto número 7) y D. Antonio Florido Martínez (para el puesto número 6), con estricta sujeción a los términos del concurso convocado por Orden Ministerial de 18 de junio de 2001, y más concretamente a los méritos específicos consignados para tales puestos en aquél,

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada Sentencia y, en consecuencia, resuelve:

Primero.—Anular la adjudicación realizada a favor de D. Antonio Florido Martínez (puesto n.º 6) y D.ª M. Ángeles Ardila Barroso (puesto n.º 7).

Segundo.—Reunida nuevamente la Comisión de Valoración con fecha 9 de octubre de 2003, se ha acordado adjudicar el puesto de trabajo n.º 6, «Jefe de Negociado N.18», en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz, con código de puesto «3345350», a D.ª Josefa I. Rebollo Sánchez y el puesto de trabajo n.º 7, «Jefe de Negociado N.18», en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz, con código de puesto «1642955», a D.ª M. Ángeles Ardila Barroso, en los términos y de conformidad con la motivación de los méritos específicos recogidas en el acta de la Comisión de Valoración reunida al efecto.

Tercero.—El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido «Jefe de Negociado N.18» en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz, con código de puesto «3345350», será de tres días, contados a partir del día siguiente del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes a la publicación de esta Orden.

Cuarto.—El destino adjudicado a D.ª Josefa I. Rebollo Sánchez será irrenunciable, no pudiendo la funcionaria que ha obtenido destino a través de este concurso participar en otros que convoquen tanto la Administración del Estado como las Comunidades Autónomas, hasta tanto hayan transcurrido dos años desde que obtiene la vacante correspondiente.

Quinto.—Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, contado igualmente desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que comunico para su conocimiento, el de los interesados y demás efectos.

Madrid, 9 de octubre de 2003.—El Ministro, P. D. (O. 21-05-96, B.O.E. 27-05-96), el Subsecretario, José Marí Olano.

Subdirección General de Recursos Humanos.

19814 *RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2003, de la Subsecretaría, por la que se acuerda declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Joaquín Fernández Tapias.*

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra —Sede en Vigo— ha dictado sentencia de fecha 25 de enero de 2001, declarada firme por sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fecha 1 de julio de 2003, cuyo tenor literal dice: «Que debemos condenar y condenamos a Joaquín Fernández Tapias como autor responsable de un delito continuado de Falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de Estafa ya definidos, a las penas de: Seis años de prisión, multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de mil (1.000) pesetas, inhabilitación especial para la obtención y desempeño de empleo y cargo público por tiempo de seis años, privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Que debemos condenar y condenamos al acusado Joaquín Fernández Tapias como autor responsable de un delito continuado de cohecho a las penas de cuatro años de prisión menor, multa de nueve millones (9.000.000) de pesetas y suspensión de derecho de sufragio pasivo y de cargo público durante el tiempo de la condena.

El acusado Joaquín Fernández Tapias indemnizará a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad que se determinará en ejecución de sentencia, resultado de deducir de la suma de 788.099.393 pesetas las cantidades que se acrediten reintegradas a la Seguridad Social por los beneficiarios de las prestaciones, respondiendo solidariamente con aquél de este pago los acusados José Manuel Ferrería Rey, Ramón Ares Cacabelos y Eugenio Bravo Crespo hasta el límite, cada uno de ellos, del importe defraudado a la Seguridad Social por la concesión de las pensiones en las que intervino cada uno de ellos, conforme a lo expuesto en el relato histórico. Y respondiendo cada uno de los acusados del pago de ¼ de las costas procesales causadas incluidas las de la acusación particular, a excepción de Eugenio Bravo Crespo en el que el 50% de ese cuarto se declarará de oficio».

Como quiera que de acuerdo con lo establecido en el art. 37.1.d) de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964, y el art. 105.1 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, en cuanto a los efectos de la pena de inhabilitación especial, se dispone la pérdida de la condición de funcionario de D. Joaquín Fernández Tapias, se declara el levantamiento de la suspensión provisional de funciones en que se encontraba el mismo, así como extinguido el procedimiento sancionador, con el archivo de las actuaciones disciplinarias practicadas, con la salvaguarda de las cautelas legales dispuesto en el art. 19.2 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por R.D. 33/86, de 10 de enero.

Teniendo en cuenta que el órgano competente para la ejecución de esta sentencia es el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por estar adscrito el interesado a este Departamento, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.6 del Real-Decreto 2169/1984, de atribución de competencias en materia de personal,

Esta Subsecretaría acuerda dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, y como consecuencia declarar la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social de D. Joaquín Fernández Tapias con D.N.I. n.º 35.948.106, con la anotación correspondiente en el Registro Central de Personal y notificación al interesado.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Subsecretario, José Marí Olano.